**APRUEBA REGULACION DE LAS OPERACIONES
BANCARIAS PARA ASEGURAR SU EFICAZ
GESTION, DESCENTRALIZACION Y
DEMOCRATIZACION**
("El Peruano" 10-IV-88)

DECRETO LEGISLATIVO
No. 469

POR CUANTO:

El Congreso de la República, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 188o. de la Constitución Política del Perú, por el artículo 17o. de la Ley No. 24723 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos y por 180 días sobre el Sistema Bancario y Financiero, con el propósito de lograr su eficaz gestión y su contribución a la descentralización y regionalización del país;

Que, conforme al principio contenido en el artículo 152o. de la Constitución Política, la actividad bancaria y financiera cumple función social de apoyo a la economía del país en sus diversas regiones y a todos los sectores de la actividad y población de acuerdo con los planes de desarrollo;

Que resulta indispensable reordenar adecuadamente el marco operativo de las instituciones que integran el Sistema Financiero Nacional a fin de permitir el acceso al crédito y demás servicios bancarios y financieros de todos los sectores económicos del país.

En conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 218o. de la Constitución Política;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros:
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

**DECRETO LEGISLATIVO DE LAS OPERACIONES
BANCARIAS PARA ASEGURAR SU EFICAZ GESTION,
DESCENTRALIZACION Y DEMOCRATIZACION**

TITULO PRELIMINAR: AMBITO DE LA LEY

TITULO I: ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

TITULO II: CAPITAL Y RESERVA LEGAL

TITULO III: ORGANOS SOCIALES

Capítulo I: De la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados.

Capítulo II: Del Directorio del Consejo de Administración y demás Organos Directivos.

Capítulo III: De la Gerencia

TITULO IV: OPERACIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Capítulo I: De las Operaciones Bancarias

Capítulo II: De las Operaciones Financieras

Capítulo III: De las Operaciones de Arrendamiento Financiero.

Capítulo IV: De las Operaciones de Ahorro y Préstamo para Vivienda.

Capítulo V: Garantías y su Ejecución

TITULO V: OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES AUXILIARES DE CREDITO

Capítulo I: De los Almacenes Generales de Depósito.

TITULO VI: DE LA REGIONALIZACION, DESCENTRALIZACION Y DEMOCRATIZACION

Capítulo I: De la Regionalización y Descentralización

Capítulo II: De la Democratización del Crédito

Capítulo III: De la Hipoteca Popular para el acceso al crédito.

TITULO VII: SUPERVISION Y SANCIONES

Capítulo I: De la Supervisión y Sanciones

Capítulo II: De las Faltas y de los Delitos en la actividad de Intermediación Financiera.

TITULO VIII: INTERVENCION, ADMINISTRACION Y LIQUIDACION

TITULO IX: DISPOSICIONES FINALES

TITULO X: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**DECRETO LEGISLATIVO DE LAS OPERACIONES
BANCARIAS PARA ASEGURAR SU EFICAZ GESTION,
DESCENTRALIZACION Y DEMOCRATIZACION.**

TITULO PRELIMINAR

FINALIDAD Y AMBITO DE LA LEY

Artículo 1o.- La presente Ley regula el ámbito operativo de las instituciones bancarias, financieras, de arrendamiento financiero y de mutuales de ahorro y préstamo para vivienda, cajas municipales de crédito popular, cajas rurales de crédito así como de otras instituciones que actúan en la intermediación financiera, también como de los almacenes generales de depósito en su calidad de instituciones auxiliares de crédito, cuyas actividades están sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Dicha supervigilancia se ejercerá sobre el Banco Central de Reserva del Perú, en cuanto al cumplimiento de su Ley Orgánica.

Artículo 2o.- Las instituciones cuya actividad es la de ofrecer servicios de intermediación de dinero del público cualquiera que fuese la modalidad, organización o forma de operar así como los organismos de control y regulación de las mismas, constituyen el sistema financiero nacional cuyos objetivos fundamentales son los siguientes:

- Fomentar la captación y movilización del ahorro interno;

- Impulsar el proceso de regionalización financiera;

- Propiciar una eficaz asignación de recursos a todos los sectores de la economía nacional y regiones del país, de conformidad con las prioridades de crecimiento establecidas en los planes de desarrollo; y,

- Promover la desconcentración y descentralización del crédito y demás servicios de intermediación financiera directa o indirecta, haciéndolo accesible a todos los sectores económicos y sociales del país.

Artículo 3o.- Las instituciones de intermediación financiera se sujetarán en cuanto a requisitos, derechos, obligaciones y demás condiciones para su organización

y funcionamiento, a lo preceptuado en la presente Ley; a las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Banco Central de Reserva del Perú. En el caso de las Mutuales se sujetarán también a las disposiciones del Banco de la Vivienda del Perú. Supletoriamente les son de aplicación, las disposiciones de la Ley General de Sociedades, los títulos I y II de la sección segunda del libro I del Código Civil y la Ley General de Cooperativas, según corresponda, así como sus ampliatorias y modificatorias.

Las disposiciones de esta Ley son supletoriamente aplicables a las entidades creadas como entes de derecho público y a otras personas jurídicas constituidas o reguladas por ley específica para ejercer algún negocio que directa o indirectamente tenga vinculación con la actividad de intermediación financiera.

Cuando en el curso de este instrumento legal se haga mención a la Superintendencia, debe entenderse que está referida a la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 4o.- Podrán ejercer las actividades de intermediación financiera las instituciones creadas por Ley y aquellas autorizadas de manera expresa por la Superintendencia, con la opinión favorable del Banco Central de Reserva del Perú. La autorización puede alcanzar a uno o más tipos de actividades de intermediación financiera de recursos del público permitidos por esta Ley.

TITULO I ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 5o.- Las instituciones dedicadas a la intermediación financiera se constituirán bajo las formas societarias que establezcan las leyes de la materia.

Artículo 6o.- Para que las instituciones a que se refiere el artículo anterior puedan organizarse y funcionar, se requiere de la autorización previa de la Superintendencia la que establecerá:

- a) Plazo de funcionamiento que no excederá de los 30 años renovables;
- b) Ambito geográfico de operación;
- c) Operaciones a realizar y sus plazos máximos;
- d) Aprobación previa a la elevación a escritura pública de la constitución de la institución y de las modificaciones del estatuto;

Artículo 7o.- La Superintendencia en el plazo de 180 días reglamentará lo concerniente a los procedimientos y requisitos relativos a las autorizaciones de organización, funcionamiento, fusiones, transformaciones, disoluciones; así como la apertura, cierres y traslados de sedes sociales y administrativas, agencias y sucursales de las instituciones de intermediación financiera.

Asimismo con respecto de la aprobación de apertura de sucursales de bancos, financieras e instituciones de intermediación financiera en general, cuyas sedes principales están en el exterior.

TITULO II CAPITAL Y RESERVA LEGAL

Artículo 8o.- El capital social de las instituciones comprendidas en la presente Ley estará constituido en

la forma y condiciones establecidas en los respectivos dispositivos legales.

El capital pagado mínimo legal de las instituciones financieras será fijado por la Superintendencia, previa opinión del Banco Central de Reserva del Perú o Banco de la Vivienda del Perú, según sea el caso. El monto de los capitales mínimos se fijará teniendo en cuenta, fundamentalmente, la naturaleza jurídica, ámbito geográfico de operaciones y el tipo de actividades que desarrolle cada grupo institucional.

La Superintendencia fijará asimismo, el capital asignado mínimo de las sucursales de instituciones financieras extranjeras.

La Superintendencia, previa opinión favorable del Banco Central de Reserva, establece y modifica el límite máximo de las obligaciones de las instituciones de crédito respecto de su capital y reservas líquidas. Podrá, asimismo, exigir montos adicionales de capital teniendo en cuenta la estructura de sus activos.

Las acciones representativas del capital social de las instituciones constituidas, bajo la forma de sociedad anónima deberán inscribirse en Bolsa.

Artículo 9o.- No pueden ser accionistas, aportantes, ni asociados de las instituciones financieras los trabajadores de la Superintendencia.

Artículo 10o.- Al término de cada ejercicio anual, las instituciones a que se refiere la presente Ley determinarán su capital y fondos de reserva líquidos, el mismo que no podrá ser inferior al determinado en el ejercicio anterior.

De existir una diferencia, ésta deberá ser cubierta con aportes dinerarios de los accionistas, aportantes o asociados según el caso, dentro del plazo fijado por la Superintendencia.

El capital de las instituciones financieras comprendidas en la presente norma se considera líquido, siempre que previa deducción por dicha institución de castigos adecuados correspondientes a la depreciación de muebles e inmuebles, al ajuste de sus activos a su verdadero valor en el mercado, y a una provisión adecuada para malas deudas, el total de su activo exceda al de todas sus obligaciones para con el público; en suma igual o mayor que el monto de su capital y reservas.

Artículo 11o.- El patrimonio de las Mutuales de Ahorro y Crédito para Vivienda y las instituciones financieras organizadas como Cooperativas, será determinado por la Superintendencia previa coordinación con el Banco de la Vivienda del Perú o el Instituto Nacional de Cooperativas.

Artículo 12o.- Las instituciones regidas por esta norma, constituirán un fondo de reserva hasta por el equivalente al de su capital social pagado; el mismo que se formará trasladando anualmente a dicho fondo un porcentaje de la utilidad, excedente o remanente, en las condiciones que anualmente fije la Superintendencia.

TITULO III
ORGANOS SOCIALES
CAPITULO I

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Artículo 13o.- Las Juntas Generales de Accionistas o Asambleas Generales de Asociados, constituyen los órganos sociales de máximo nivel de las instituciones a que se refiere esta norma y se rigen en cuanto a sus atribuciones, limitaciones e incompatibilidades por las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades, la Ley General de Cooperativas y los títulos I y II de la sección segunda del libro I del Código Civil, según corresponda.

CAPITULO II
DEL DIRECTORIO, DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y DEMAS ORGANOS DIRECTIVOS

Artículo 14o.- Los órganos directivos son los ejecutores de las disposiciones emanadas por las Juntas Generales y las Asambleas de Asociados, quienes tienen la representación y administración de la institución.

Artículo 15o.- No pueden ser directores ni miembros del Consejo de Administración:

a) Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades, el Código Civil, la Ley General de Cooperativas;

b) Los residentes en el extranjero;

c) Los senadores, diputados, jefes de los poderes del Estado y miembros del Poder Judicial;

d) Los deudores directos o indirectos; los accionistas, aportantes, asociados o directores de una empresa deudora de la respectiva institución financiera. Salvo el caso que la deuda sea por financiamiento de casa única;

e) Los deudores en mora de cualquier institución financiera;

f) Los directores, de alguna institución del sector financiero ni sus cónyuges;

g) Los gerentes y servidores no podrán ser directores salvo autorización de la Superintendencia y a lo establecido para la banca autogestionaria;

h) Los miembros de una misma sociedad conyugal, en la misma institución financiera;

i) Los directores, o servidores de instituciones del sector que la Superintendencia o el Poder Judicial los hubiese sancionado o funcionarios de instituciones intervenidas o liquidadas por la Superintendencia, que hubieran resultado penalmente responsables, así como aquellos que en el ejercicio de tales funciones hubiesen sido sancionados administrativamente con la separación de sus cargos; y,

j) los trabajadores de la Superintendencia.

Artículo 16o.- Los Directores y miembros del Consejo de Administración incurren en responsabilidad por:

a) Las operaciones de créditos o garantías con personas naturales o jurídicas que hubiesen autorizado sobre los límites establecidos;

b) Concederse créditos o garantías de manera directa o indirecta, salvo las permitidas legalmente;

c) Abstenerse de responder a las comunicaciones que legalmente estén obligados.

CAPITULO III
DE LA GERENCIA

Artículo 17o.- Los gerentes son los ejecutores de los acuerdos de los órganos directivos y responsables del manejo de la institución;

Artículo 18o.- El nombramiento de gerentes no puede recaer en personas jurídicas; salvo autorización expresa de la Superintendencia.

TITULO IV
OPERACIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA
CAPITULO I
DE LAS OPERACIONES BANCARIAS

Artículo 19o.- Las operaciones bancarias permitidas dentro de los límites establecidos, en cuanto a monto y plazo fijados por la Superintendencia o el Banco Central de Reserva, son:

a) Otorgar créditos y descontar letras de cambio y pagarés;

b) Adquirir facturas, warrants o efectos por cobrar provenientes de transacciones comerciales. El endoso de los mencionados documentos transfiere el derecho a favor de la institución adquirente sin necesidad de notificar al deudor;

c) Efectuar operaciones de crédito y depósitos con otras instituciones financieras en el país y en el exterior;

d) Expedir tarjetas de crédito bancario propias o de terceros en favor de sus clientes;

e) Recibir depósitos a la vista y a plazo de personas naturales y jurídicas; así como depósitos de ahorro de personas naturales e instituciones sin fines de lucro;

f) Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos;

g) Comprar y vender giros en el país o en el exterior; así como comprar y vender moneda extranjera, de acuerdo a las normas cambiarias

h) Aceptar letras y emitir pagarés;

i) Expedir cartas de crédito, autorizando a sus beneficiarios a girar letras de cambio a cargo de la institución o de sus corresponsales, a la vista o a plazos;

j) Otorgar avales, cartas-fianzas y otras garantías;

k) Adquirir y conservar en los plazos y condiciones que norme o autorice la Superintendencia, en propiedad acciones cotizadas en Bolsa, bonos u otras obligaciones, inclusive de empresas del exterior;

l) Recibir objetos o valores en custodia, así como arrendar cajas de seguridad;

m) Aceptar y cumplir fideicomisos u otras comisiones de confianza; y,

n) Las demás operaciones que autorice la Superintendencia y que resulten necesarias para la mejor ejecución de los negocios de la institución;

Artículo 20o.- Toda institución autorizada para efectuar operaciones bancarias estará sujeta a las siguientes restricciones:

a) No podrá directa ni indirectamente, otorgar créditos a personas naturales, jurídicas o grupos prestatarios por sumas que excedan a los límites y coeficientes que establezcan la Superintendencia o el Banco Central de Reserva;

Para determinar los referidos límites individuales, la Superintendencia establecerá los criterios para definir los conceptos de grupos prestatarios y de empresas vinculadas a instituciones financieras o a sus accionistas, directores, gerentes o servidores;

b) No podrá conceder créditos con respaldo de sus propias acciones. Tampoco podrá ser compradora ni poseedora de sus propias acciones, salvo el caso de que la aceptación de ellas en prenda o su compra, sea necesaria para evitar pérdida resultante de una deuda contraída anteriormente;

Toda acción adquirida en esta circunstancia deberá ser vendida dentro de un año de la fecha de la adquisición.

c) No podrá conceder créditos ni aceptar la garantía de ninguno de sus directores miembros de sus órganos directivos, miembros de su Consejo de Vigilancia y servidores se exceptúan de esta norma los adelantos sobre las remuneraciones de los funcionarios y empleados, y los préstamos con garantía de los beneficios sociales que la Ley autoriza, cuando tales adelantos y préstamos no excedan del importe de los beneficios sociales devengados a su favor, así como los préstamos con garantía hipotecaria para fines de vivienda de los funcionarios y empleados, cuando el bien hipotecado constituye su única propiedad inmueble;

d) Estará impedida de mantener depósitos y obligaciones de una misma persona natural o jurídica por encima de los límites que con respecto al total de sus obligaciones fije la Superintendencia

e) Mantener depósitos y obligaciones con el público por encima de los límites que, con respecto de su capital y reservas líquidas determine la Superintendencia en concordancia con el Banco Central de Reserva;

f) No podrá mantener invertidos en activos inmovilizados un monto superior al de su patrimonio;

g) Adquirir y conservar bienes inmuebles, excepto en los casos siguientes:

1. Para ser ocupados por la institución en la realización de sus actividades, pudiendo transitoriamente arrendar una parte de los mismos.

2. Para hacerse cobro de acreencias que sus clientes le adeudan y no han podido cancelar en su oportunidad. La tenencia debe ser temporal.

h) Aceptar como garantía acciones de otra institución financiera. En caso de ejecución de la obligación garantizada podrán ser adjudicadas las acciones a la institución prestamista, debiendo ser negociadas en plazos que fijará la Superintendencia;

i) No podrá financiar directa ni indirectamente sus incrementos de capital, ni conceder créditos destinados a la compra de acciones y valores;

j) Las sucursales de bancos extranjeros están prohibidas de recibir depósitos en ahorro;

k) Las oficinas de representación están prohibidas de efectuar operaciones de intermediación financiera;

l) No podrá conceder avales, cartas-fianzas y otras garantías por encima de los límites que con respecto de su capital y reservas líquidas determine la Superintendencia en concordancia con el Banco Central de Reserva;

m) Explotar por cuenta propia, empresas comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase;

CAPITULO II DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 21o.- Son operaciones financieras, para la presente norma, las de intermediación de mediano y largo plazo de acuerdo con las condiciones de monto y plazo que establezca la Superintendencia.

En consecuencia, las instituciones autorizadas podrán efectuar las siguientes operaciones:

a) Otorgar créditos y descontar letras y pagarés a plazos no menores de 360 días con garantía, con las limitaciones que señala el artículo 20o. de la presente norma;

b) Otorgar avales, cartas-fianzas, cartas de crédito y otras garantías;

c) Brindar servicios de caja, en tanto el movimiento normal de las cuentas respectivas, acredite que no se trata de la recepción de depósitos a la vista;

d) Suscribir, mantener en cartera, comprar, vender y en general operar por cuenta propia con valores inscritos y cotizados en Bolsa, así como con valores públicos;

e) Comprar, vender y en general, operar por cuenta ajena con valores;

f) Tomar primeras emisiones de valores para sí o para colocarlas en el público, pudiendo en este último caso garantizar al emisor de los valores la colocación de una parte o la totalidad de la emisión dentro de los plazos y condiciones pactadas;

g) Aceptar y ejecutar comisiones de confianza o fideicomiso;

h) Recibir depósitos a plazo;

i) Emitir bonos financieros y bonos de arrendamiento financiero;

j) Contraer créditos con otras instituciones financieras del país o del exterior, hasta un límite en relación a su capital pagado y reservas líquidas;

k) Servir de agentes financieros para la inversión de recursos externos en el país;

l) Realizar operaciones de arrendamiento financiero;

m) Comprar títulos-valores;

n) Las demás operaciones que autorice la Superintendencia y que resulten necesarias para la mejor ejecución de los negocios de la institución.

Excepcionalmente la Superintendencia podrá autorizar operaciones en plazos distintos a los señalados en el presente artículo.

Artículo 22o.- Son de aplicación a las instituciones autorizadas únicamente a realizar operaciones financieras, las restricciones contenidas en el capítulo I del presente título, quedando además, impedidas de:

a) Participar en el capital accionario de otras instituciones financieras;

b) Recibir depósitos a la vista o de ahorros, y en general abrir o mantener como depósitos cuentas que participen de la naturaleza del depósito en cuenta corriente; salvo excepciones permitidas;

Lo dispuesto en el presente artículo no es de aplicación a la Corporación Financiera de Desarrollo.

CAPITULO III DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Artículo 23o.- Las operaciones de arrendamiento financiero son las siguientes:

a) Adquirir bienes muebles o inmuebles, para ser destinados al arrendamiento financiero;

b) Efectuar operaciones de arrendamiento financiero, con personas naturales o jurídicas;

c) Emitir bonos de arrendamiento financiero y bonos de arrendamiento financiero para reinversión;

d) Concertar créditos y contratar líneas de crédito del sistema financiero nacional o del exterior; y

e) Efectuar operaciones de retroarrendamiento financiero de bienes muebles e inmuebles.

Artículo 24o.- Las instituciones autorizadas sólo para efectuar arrendamiento financiero no podrán realizar las siguientes operaciones:

a) Participar en el capital accionario de otras empresas de arrendamiento financiero y en aquellas que a su vez participen en el capital accionario de la misma empresa de arrendamiento financiero;

b) Recibir depósitos a la vista, a plazos y de ahorros;

c) Financiar directa o indirectamente los aumentos de capital de la propia empresa de arrendamiento financiero;

d) Aceptar como garantía sus propias acciones;

e) Otorgar avales, carta-fianza, cartas de crédito o cualquier otra garantía;

f) Otorgar créditos cuya naturaleza difiera al de una operación de arrendamiento financiero.

Artículo 25o.- Son de aplicación a las instituciones de arrendamiento financiero las restricciones contenidas en el capítulo I del presente título.

Artículo 26o.- Las operaciones de arrendamiento financiero podrán referirse a bienes tangibles y no a derechos sobre éstos, salvo el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal y similares.

Tampoco se podrán celebrar contratos de arrendamiento financiero sobre títulos o valores de cualquier especie o denominación, contribuciones tecnológicas intangibles, marcas, patentes, programas de computación y similares.

CAPITULO IV DE LAS OPERACIONES DE LAS MUTUALES DE AHORRO Y PRESTAMO PARA VIVIENDA

Artículo 27o.- Las Mutuales de ahorro y préstamo para vivienda podrán realizar las operaciones siguientes:

a) Recibir depósitos a plazo así como depósitos de ahorro que serán reglamentados por la Superintendencia;

b) Recibir recursos financieros provenientes de fuentes externas, dentro de los límites que fije el Banco Central de Reserva;

c) Otorgar préstamos a sus asociados con garantía hipotecaria u otras garantías debidamente calificadas, con fines de vivienda, sea para su adquisición, construcción, ampliación, terminación, mejora o sustitución de gravamen;

d) Otorgar préstamos para habilitación urbana de terrenos, construcción de viviendas o provisión de servicios en general;

e) Otorgar préstamos para compra de terrenos de habilitación urbana debidamente calificada;

f) Otorgar préstamos para la construcción de vivienda de alquiler, con garantía de primera hipoteca, y conforme a las regulaciones que establezca el Banco de la Vivienda, previa opinión de la Superintendencia.

g) Otorgar préstamos para mejora de inmuebles destinados a vivienda, con garantía hipotecaria o fianza solidaria de empleador u otra garantía de reconocida solvencia;

h) Otorgar préstamos a personas naturales o jurídicas del sector de la industria de la construcción y actividades conexas con garantía real, valores o fianza solidaria de otra institución financiera;

i) Comprar o construir inmuebles para uso propio, parte de los cuales podrán ser vendidos o arrendados;

j) Efectuar operaciones con instituciones financieras del país dentro de los límites establecidos por el Banco Central de Reserva;

k) Realizar operaciones de arrendamiento financiero de inmuebles dentro de las normas contenidas en el capítulo en cuanto le sean aplicables;

l) Prestar servicios de caja, cobranza y pagos por cuenta de terceros; y,

m) Las demás operaciones que autorice la Superintendencia.

Artículo 28o.- Son de aplicación a las Mutuales de Ahorro y Préstamo para Vivienda las restricciones contenidas en el artículo 20o. del presente título.

Artículo 29o.- La Superintendencia, previa opinión del Banco de la Vivienda del Perú determinará la proporcionalidad que deberán guardar las distintas modalidades de otorgamiento de créditos así como las garantías, plazos, términos y demás condiciones genéricas aplicables a cada una de estas.

CAPITULO V DE LAS GARANTIAS

Artículo 30o.- Cuando un título valor u otro valor mobiliario susceptible de negociación por endoso, con excepción del cheque bancario, se encuentre en poder de una institución financiera, el endoso se presume de hecho en pago de obligaciones con la institución financiera, a no ser que medie estipulación expresa en contrario.

Los títulos y valores nominativos podrán darse en prenda a una institución financiera mediante la inscripción de dicho gravamen en el Libro de Registro de Transferencias de la entidad emisora.

TITULO V
OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES AUXILIARES
DE CREDITO
CAPITULO I
DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

Artículo 31o.- Los almacenes generales de depósito podrán realizar las operaciones y servicios siguientes:

a) Almacenamiento, conservación y custodia de cualquier tipo de mercaderías y productos de propiedad de terceros, de procedencia nacional o extranjera en almacenes propios o arrendados;

b) Establecer y operar depósitos aduaneros autorizados, previo cumplimiento de los requisitos que la Ley establezca;

c) Emitir certificados de depósito y warrants sobre mercaderías y productos que reciban en depósitos autorizados;

d) Arrendar parte de sus almacenes;

e) A solicitud del depositante, y con conocimiento del acreedor prendario podrá empacar, ensacar u otra actividad dirigidas a la conservación de las mercaderías y productos depositados.

Artículo 32o.- Los almacenes generales de depósito están prohibidos de:

a) Recibir en depósito mercaderías sujetas a gravamen o a embargo judicial notificados a la administración del almacén;

b) Ser fiador o recibir en garantía sus propias acciones; y

c) Comprometer sus bienes en asuntos distintos a su objeto social.

Artículo 33o.- El plazo del depósito no excederá de un año, pudiendo prorrogarse hasta por un período igual a la solicitud de los depositantes y a juicio de la institución almacenadora, siempre que las condiciones de las mercaderías o producto lo permitan. En el caso de depósito de alimentos y otras mercaderías perecederas, cuyo depósito requiera de cámaras frigoríficas o recintos especiales, sólo podrá el plazo del depósito tener una duración de noventa (90) días, prorrogables por un período igual.

Artículo 34o.- Las mercaderías en depósito serán debidamente aseguradas en compañías de seguros establecidas en el país a cargo directamente del depositante o por el almacén general de depósito; por cuenta de aquél.

Artículo 35o.- En el caso de depósito de productos cuyo traslado hacia los depósitos del almacén general, no sea conveniente, éste podrá establecer almacenes de campo en locales de propiedad de terceros asumiendo el control directo de dichos locales bajo su responsabilidad.

TITULO VI
DE LA REGIONALIZACION, DESCENTRALIZACION Y
DEMOCRATIZACION
CAPITULO I

DE LA REGIONALIZACION Y DESCENTRALIZACION

Artículo 36o.- Constitúyase el Sistema Financiero Re-

gional como instrumento que impulse y apoye el proceso de desarrollo regional del país a través de instituciones financieras cuya estructura organizacional, funcional y operativa descentralizada se adecuará a las características y necesidades de financiamiento integral de las diferentes regiones del país; acorde con los planes de desarrollo que formulen los Organismos Regionales.

El Sistema Financiero Regional tendrá como base las instituciones financieras regionales y las oficinas descentralizadas de las demás instituciones financieras.

Artículo 37o.- Las instituciones financieras regionales son aquellas que se constituyen fijando su sede principal en una de las regiones. Su ámbito de operación es el de la región donde tiene su sede, pudiendo operar en las regiones que determine la Superintendencia, con la opinión favorable del Banco Central de Reserva.

Artículo 38o.- La Superintendencia en coordinación con el Banco Central de Reserva autoriza la creación de nuevas instituciones financieras, la fusión de las actuales, o la absorción parcial de sucursales o agencias de las mismas en una o más instituciones que operan en las regiones con la finalidad de propiciar la racionalización y descentralización del sistema financiero.

Artículo 39o.- La Superintendencia establecerá las operaciones y el ámbito geográfico de las instituciones financieras regionales.

Artículo 40o.- Las acciones representativas del capital social de las instituciones financieras regionales no vinculadas a las de carácter nacional pertenecerán a residentes de la región en que se establecen.

Artículo 41o.- En cada una de las regiones deberá establecerse oficinas del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia, que les permita realizar con autonomía suficiente las funciones que les son inherentes.

Artículo 42o.- El Banco Central de Reserva fijará tasas de redescuento, encaje y de interés preferencial a las instituciones financieras que desarrollen sus actividades preferentemente en cada una de las regiones, de conformidad con las prioridades establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 43o.- Facúltase al Banco Central de Reserva para que en concordancia con el Art. 74o. de su Ley Orgánica fije coeficientes en la composición de cartera de los intermediarios financieros en función de las regiones del país y de las actividades económicas prioritarias en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 44o.- Los Directorios de las instituciones regionales deberán estar conformados mayoritariamente por personas residentes en su zona de operación.

Artículo 45o.- Los bancos regionales y las oficinas de otros intermediarios financieros que operen en una región, para cubrir sus necesidades de infraestructura operativa y administrativa adquirirán en forma preferente bienes y servicios que se generen en ella.

Artículo 46o.- El Banco Central de Reserva previa opinión favorable de la Superintendencia dictará las normas necesarias para que las instituciones financieras nacionales, contribuyan a canalizar los recursos captados del público en el distrito financiero de Lima Metropolitana hacia las regiones en que operan, sobre las siguientes bases:

a) No podrán colocar en la capital de la República, los depósitos captados del público en las regiones donde operan.

b) Un porcentaje de los depósitos captados del público en el Distrito Financiero de Lima Metropolitana, se coloquen en las regiones en que operan. Para la asignación de dichos depósitos en las regiones, se considerará las variables del producto bruto interno regional, población e índices de desempleo y subempleo.

Artículo 47o.- Las instituciones financieras que a la fecha vengán operando en los diferentes distritos financieros del país conformarán sus filiales, subsidiarias o sucursales regionales en base a las actuales sucursales y agencias que operan en las respectivas regiones.

Artículo 48o.- A fin de asegurar la efectiva descentralización de las instituciones que integran el sistema financiero nacional y en concordancia con el proceso de regionalización del país, éstas deberán formular en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la fecha, sus programas de adecuación a lo dispuesto en el presente capítulo, los que deberán ser presentados a la Superintendencia.

Artículo 49o.- El Poder Ejecutivo queda facultado para que por decreto supremo reordene las normas que constituyen el sistema de los Distritos Financieros en función del proceso de regionalización.

CAPITULO II DE LA DEMOCRATIZACION DEL CREDITO

Artículo 50o.- Las instituciones financieras destinarán un mínimo de diez por ciento (10%) del total de su cartera de colocaciones para el otorgamiento de créditos supervisados destinados a la producción e inversión de pequeños empresarios individuales o grupos de éstos.

Dentro de dicho límite, la Superintendencia establecerá anualmente coeficientes de cartera orientados hacia el crédito para las comunidades campesinas y nativas y para los microempresarios, artesanos e informales.

Artículo 51o.- Para el otorgamiento de los créditos a que se refiere el artículo anterior serán de aplicación las disposiciones normativas y reglamentarias que utilizan los entes financieros especializados en este tipo de operaciones y las que se dicten por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, pudiendo los intermediarios financieros otorgar los créditos directamente o mediante la suscripción de convenios.

Artículo 52o.- La Superintendencia y el Banco Central de Reserva concederán prioridad a las solicitudes de apertura de instituciones financieras de servicio local tales como las Cajas de Crédito Agrícola Rural, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas de Crédito Comunal e instituciones de crédito en general vinculadas a la pequeña empresa, microempresa y artesanía, así como la apertura de sucursales agencias y oficinas en zonas urbanas y rurales insuficientemente vinculadas al sistema financiero y que así lo requieran para su desarrollo.

Artículo 53o.- La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) y el Banco Industrial del Perú, estable-

cerán las normas y promoverán la creación de "Fondos de Garantía" que permitirán a las microempresas, pequeñas empresas, artesanos, comunidades campesinas, comunidades nativas, cooperativas de servicios múltiples y otras similares, complementar las garantías requeridas para facilitar el acceso al financiamiento para la realización de sus actividades.

Sus aportaciones estarán constituidas, entre otros recursos, con el aporte anual del 0.25% del promedio de la captación de recursos que efectúen las instituciones del sistema financiero.

Artículo 54o.- La Superintendencia autoriza a las instituciones del sistema financiero a provisionar los saldos deudores y dictar las demás disposiciones que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma.

Artículo 55o.- De no existir garantías reales, se aceptará las garantías mancomunadas o solidarias de los microempresarios rurales y urbanos organizados en grupo para el otorgamiento de los créditos.

Artículo 56o.- El Banco Central de Reserva podrá establecer líneas de crédito que se destinen preferentemente para exportaciones de las pequeñas y microempresas.

CAPITULO III DE LA HIPOTECA POPULAR PARA EL ACCESO AL CREDITO

Artículo 57o.- Los poseedores de lotes y propietarios de edificaciones sobre los mismos, ubicados en los asentamientos humanos denominados Pueblos Jóvenes, podrán solicitar créditos para la ampliación o mejora de sus viviendas y para la inversión en actividades productivas con la garantía hipotecaria a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 58o.- Créase la Hipoteca Popular como un derecho real de garantía regido por la presente norma.

Artículo 59o.- Los titulares de los derechos a que se refiere el artículo 57o. de la presente norma, podrán constituir hipoteca popular sobre los mismos. Mediante esta hipoteca se afecta conjuntamente, el derecho de posesión sobre el lote y el derecho de propiedad de la edificación existente sobre él, en garantía de cualquier obligación. Estos derechos, una vez gravados, son inseparables y no pueden ser objeto de actos jurídicos singulares.

Artículo 60o.- La hipoteca popular se otorga mediante contrato privado con firmas legalizadas por notario público. Son requisitos para su validez:

a) Que afecte el bien del poseedor del lote y propietario de la construcción;

b) Que recaiga sobre la posesión del lote y la propiedad de la edificación.

c) Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable;

d) Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro especial creado por la presente norma.

Artículo 61o.- Son de aplicación a la hipoteca popular las disposiciones del Código Civil en cuanto no se

opongan a la presente norma.

Artículo 62o.- Mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Justicia se normará la ejecución de la hipoteca popular. Sólo podrán participar en el remate de dicha hipoteca los autorizados por la ley de pueblos jóvenes.

Artículo 63o.- Créase en cada uno de los municipios distritales, el Registro Especial para Pueblos Jóvenes, con el fin de permitir el acceso al crédito con garantía de la hipoteca popular. Mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Justicia, se normará los requisitos que deberá exigir el Registro Especial para Pueblos Jóvenes.

Artículo 64o.- En el Registro Especial se inscribirá como primera inscripción la posesión del lote y la propiedad de la edificación conjuntamente con la hipoteca popular que se regula en el presente Decreto Legislativo. Los derechos inscribibles son la posesión del lote y la propiedad de la edificación, que constituyen registralmente un todo inseparable.

Son inscribibles además en este registro los actos y contratos, que constituyan, declaren, transmitan, modifiquen, limiten o extingan los derechos reales que son objeto de la inscripción y las resoluciones judiciales y administrativas que se refieran a ellos.

Artículo 65o.- El Registro Especial se regirá por los principios registrales de publicidad, fe pública, prioridad registral, tracto sucesivo y rogación.

TITULO VII SUPERVISION Y SANCIONES

CAPITULO I DE LA SUPERVISION Y SANCIONES

Artículo 66o.- La Superintendencia en beneficio del interés público ejerce el control de las instituciones que la Constitución y las leyes determinen, de acuerdo con las facultades y atribuciones señaladas en su Ley Orgánica y con los procedimientos técnicos de supervisión y control que con arreglo a su autonomía establezca.

Artículo 67o.- Fijese en un quinto del uno por ciento de los activos los porcentajes máximos para los efectos de la determinación de las contribuciones a que se refiere el artículo 33o. del Decreto Legislativo No. 197.

Artículo 68o.- La Superintendencia puede sancionar a las instituciones o personas controladas, cuando incurran en alguna de las faltas que a continuación se indican:

- a) Incumplir leyes o normas administrativas que las rijan;
- b) Conducir sus negocios y operaciones en forma no autorizada;
- c) Llevar un inadecuado registro contable de sus operaciones;
- d) Incorrecta presentación de sus estados financieros;
- e) Suministrar informes inexactos;
- f) Permitir que el encaje legal descienda a niveles inferiores a los vigentes; independientemente de la sanción que aplique el Banco Central de Reserva;

g) Haber reducido el capital líquido a cifras inferiores a las que prescribe la Ley y/o los estatutos,

Artículo 69o.- Las sanciones aplicables a las instituciones y personas controladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, son las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Multas hasta el 5% del Capital y Reservas;
- c) Multas a directores, gerentes y servidores de acuerdo a la gravedad de la falta, hasta por el quintuplo de la remuneración mensual del infractor, en el caso de directores que sólo perciban dieta, la multa no podrá exceder de 20 veces dicho monto mensual;
- d) Prohibición para repartir dividendos;
- e) Prohibición de realizar determinadas operaciones;
- f) Suspender hasta por seis meses o remover a los directores y gerentes de las instituciones sujetas a control;
- g) Suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento;
- h) Intervención; e,
- i) Liquidación

Las sanciones serán aplicadas por la Superintendencia sin perjuicio de las demás penas prescritas por la ley y la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

Artículo 70o.- Cuando la Superintendencia considere que los antecedentes o la situación de los créditos personales y de las empresas a ellas vinculados, hacen inconveniente la elección de un director o gerente, procederá a suspender o remover según sea el caso a tal director o gerente.

Artículo 71o.- Los directores y gerentes de las instituciones reguladas por la presente norma, son responsables de:

- a) Aprobar operaciones con infracción de las prohibiciones o limitaciones señaladas en la Ley o en disposiciones de la autoridad competente;
- b) No adoptar las medidas necesarias para la corrección de las irregularidades de la gestión;
- c) No adoptar las acciones conducentes a garantizar la oportunidad y veracidad de las auditorías internas y externas de la institución.
- d) No informar a la Superintendencia sobre hechos o situaciones que deben presumirse han de incidir negativamente sobre la estabilidad o solidez de la institución;
- e) No atender los mandatos u órdenes administrativas que en el ejercicio de sus funciones dicte la Superintendencia ni atender los pedidos de información que formule el Banco Central de Reserva del Perú;
- f) Dar oportuna respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia, del Banco Central de Reserva del Perú y Banco de la Vivienda del Perú que sean puestas en conocimiento del Directorio por mandato de la Ley o indicación de dichos organismos;
- g) Condicionar la concesión de un crédito a la contratación por el usuario de los servicios de empresas o personas en las que tenga interés directo o indirecto y que deban emitir los dictámenes e informes correspondientes; así como ejercer influencia en la emisión de dictámenes e informes del personal subalterno;

h) Aceptar donaciones de dinero u objetos de valor, viajes o préstamos personales por cualquier título, directa o indirectamente, de los beneficiarios de los créditos y servicios de las instituciones que conducen, o de los propietarios, directores, gerentes o servidores de las empresas beneficiarias.

La infracción de las disposiciones contenidas en el presente artículo darán lugar a que la Superintendencia imponga las sanciones de multa, suspensión o remoción de los directores y gerentes según la gravedad y reiterancia de las faltas, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

Artículo 72o.- Los directores, miembros del Consejo de Administración, gerentes y servidores de las instituciones comprendidas en esta norma que practiquen o permitan que se practiquen operaciones prohibidas o que infrinjan las disposiciones legales que las regulen, serán personalmente responsables con sus bienes, por el daño causado a la institución sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 73o.- Exceptuando los casos previstos por el artículo 191o. inciso 4 del Decreto Ley No. 14605, Ley Orgánica del Poder Judicial, por el artículo 85o. del Decreto Ley No. 22095 que reprime el tráfico ilícito de drogas y por el artículo 6o. del Decreto Legislativo No. 152, Ley Orgánica del Ministerio Público es absolutamente prohibido al titular de la Superintendencia y a todos los servidores de dicho Organismo dar a conocer cualquier información relacionada con las operaciones privadas que las Instituciones bajo su control realicen con sus clientes.

Artículo 74o.- Toda comunicación dirigida a una institución sujeta a control de la Superintendencia con relación a alguna inspección o investigación practicada o que contenga recomendaciones sobre sus negocios, deberá ser puesta en conocimiento del directorio o consejo de administración, según el caso, bajo responsabilidad de quien la recibe

CAPÍTULO II

DE LAS FALTAS Y DELITOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Artículo 75o.- Las personas naturales o los representantes legales o apoderados de personas jurídicas, que sin autorización expresa de la Superintendencia realicen operaciones de intermediación financiera previstas en esta Ley; se harán acreedores al pago de multa de hasta el doble del importe de las operaciones realizadas, que le aplicará la Superintendencia, de acuerdo a la gravedad, volumen o reincidencia en las operaciones realizadas.

La sanción de multa, no enerva la responsabilidad penal en que haya incurrido, por delito contra el patrimonio, bajo la modalidad de estafa, previsto y penado en los artículos 244o. y siguientes del Código Penal.

Artículo 76o.- Los directores, gerentes y servidores de las instituciones a que se refiere la presente norma, que deliberada e intencionalmente se encuentren incurso dentro de la conducta prevista en el artículo 71o. de

la presente norma; o que deliberadamente participare o condujeren con sus actos a contravenir lo previsto en el artículo 20o. inciso a), estarán obligados a devolver los créditos obtenidos irregularmente, y serán sancionados de conformidad con el artículo 69o. y sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondiere por los delitos de estafa y contra la fe pública, previstos en los artículos 244o. y 364o. y siguientes del Código Penal.

Artículo 77o.- Los directores, gerentes y servidores de las instituciones comprendidas en esta ley que intencionalmente proporcionen información falsa al Superintendente o a cualquiera de sus delegados o inspectores serán sancionados de conformidad con lo previsto en el artículo 69o. de la presente norma sin perjuicio de la responsabilidad que le correspondiere por delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, previsto en el artículo 364o. del Código Penal.

Artículo 78o.- Los directores, gerentes y servidores de las instituciones a que se refiere la presente norma, que realicen operaciones que conlleven a una concentración crediticia en personas naturales o jurídicas vinculadas a ellos, personal o económicamente, o que concedan u obtengan en beneficio personal créditos no permitidos por las normas vigentes, estarán incurso dentro de las conductas punibles por delitos de estafa y defraudación previstos en el artículo 244o. y 246o. inciso 5 del Código Penal.

Artículo 79o.- Los clientes y usuarios de las instituciones a que se refiere la presente Ley que intencionalmente proporcionen información falsa a dichas instituciones con el objeto de obtener crédito u otros beneficios incurrirán en delito contra la fe pública bajo modalidad de falsificación de documentos, prevista en el artículo 364o. y delito de estafa, previsto en el artículo 244o. del Código Penal.

Artículo 80o.- La Superintendencia podrá requerir a todas las personas naturales o jurídicas, aún cuando no se encuentren comprendidas dentro del ámbito de su competencia, la presentación de la información que considere necesaria para determinar las posibles infracciones a la Ley.

Quien no cumpliera con el requerimiento del párrafo anterior, estará incurso en lo previsto en el artículo 322o. del Código Penal.

Artículo 81o.- En todos los casos previstos en el presente título, será agraviada la Superintendencia sin perjuicio de las demás entidades o personas naturales que también resulten perjudicadas.

TÍTULO VIII

INTERVENCION, ADMINISTRACION Y LIQUIDACION

Artículo 82o.- Si en el ejercicio de las funciones de control y supervisión, la Superintendencia tuviere indicios razonables de irregularidades administrativas u operativas en alguna de las instituciones controladas podrá disponer su intervención precautoria por un plazo no mayor de 90 días prorrogables por igual período y por una sola vez. Para tal efecto, el Superintendente podrá

nombrar uno o más interventores con las facultades que les asigne.

Artículo 83o.- Durante el período de intervención precautoria subsisten las responsabilidades y obligaciones de los directivos, gerentes y servidores de la institución intervenida, los que no podrán hacer abandono de sus funciones y actuarán bajo la supervisión y control de los interventores quienes estarán facultados para suspender o vetar operaciones y para dictar las medidas tendientes a regularizar la situación institucional, así como para suspender por delegación a los directores, gerentes y servidores en el ejercicio de sus cargos.

Artículo 84o.- La Superintendencia puede tomar a su cargo mediante intervención administrativa, los negocios y bienes de cualquier institución sometida a intervención precautoria, y aun sin haber dispuesto dicha intervención, siempre que la institución se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Haber suspendido el pago de sus obligaciones;
- b) Llevar a cabo sus negocios y operaciones en forma no permitida por la ley o de manera que ponga en peligro su seguridad, solvencia y los depósitos del público;
- c) Haber sufrido un quebranto en su capital que lo reduzca a una cantidad inferior al mínimo exigido por la ley y/o su estatuto;
- d) Negarse a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por la Superintendencia;
- e) Negarse después de ser requerida, a someter sus libros y negocios al examen de un inspector de la Superintendencia;
- f) Infringir disposiciones legales o de su propio estatuto;

La intervención administrativa por la Superintendencia tendrá una duración no mayor de 180 días, prorrogables por igual plazo y por una sola vez.

Artículo 85o.- La intervención administrativa por la Superintendencia conlleva la suspensión de la competencia de la Junta General de Accionistas y del Directorio o de los órganos sociales equivalentes, según fuere el caso, cuyas atribuciones serán ejercidas por dicha institución, quedando ampliamente facultada para adoptar las siguientes medidas:

- a) Aquellas que sean necesarias para restablecer su situación patrimonial o administrativa; o
- b) Declararla en disolución para su fusión o liquidación definitiva de sus bienes y negocios y/o cancelar la autorización de funcionamiento, según sea el caso.

Para estos efectos la Superintendencia está facultada para disponer la suspensión de pagos, determinar el valor de las acciones o certificados de aportación, reajustar su capital y realizar todas aquellos actos que competen a los órganos sociales cuyas atribuciones asume.

Artículo 86o.- Si una institución solvente comprendida en esta Ley desea poner término a sus actividades, o cuya autorización de funcionamiento ha concluido, puede ser liquidada por un número impar de representantes no menor de tres designados por sus acciones o propietarios, bajo las reglas y disposiciones dictadas por la Superintendencia, la que podrá exigir las garantías que estime convenientes a los liquidadores, a fin de asegurar

la debida ejecución de su encargo. La Superintendencia puede exigir también que esa institución dé las garantías que estime convenientes para responder a posibles reclamaciones pendientes contra ella.

El agente o agentes mencionados anteriormente suministrarán a la Superintendencia los informes y datos que ésta solicite. Las actividades de la institución en liquidación estarán sometidas, en todo momento, al control de la Superintendencia.

Artículo 87o.- El acto de tomar a su cargo la Superintendencia una institución para su liquidación, no pondrá término a la existencia legal de la institución, la que conservará su personería jurídica hasta que esa liquidación esté concluida y el Superintendente o sus Delegados Especiales puedan durante la liquidación iniciar y proseguir en nombre de la institución, todas las acciones y procedimientos legales que sean necesarios.

El Superintendente o sus Delegados Especiales de acuerdo a los poderes que éste les confiera, pueden otorgar a nombre de la institución en liquidación toda clase de documentos públicos y privados necesarios y adecuados para efectuar cualquier venta, arrendamiento o transferencia de propiedad mueble o inmueble, o para llevar a debido efecto cualquier acto conducente a la liquidación. Los documentos extendidos de acuerdo con la autorización conferida por esta norma tendrán tanto valor y efecto, para todos sus fines, como si dichos instrumentos hubieran sido extendidos por los apoderados de la institución, con la autorización de sus órganos sociales competentes.

Artículo 88o.- Resuelta la liquidación de una institución comprendida en la presente norma, a cargo de la Superintendencia, si la institución se encontrase a juicio de dicho organismo de control en un estado que justifique su declaración de quiebra, hará formalmente la declaración respectiva y procederá a la correspondiente liquidación. En uno u otro caso, la intervención de los juzgados y tribunales se limitará a las funciones que les designa esta ley.

Artículo 89o.- Luego que la institución haya entrado en liquidación no podrá iniciarse procedimientos contenciosos contra ella, no podrá decretarse embargo, ni dictarse otras medidas precautorias sobre sus bienes, a causa de obligaciones contraídas antes que la Superintendencia haya intervenido a esta institución.

Cuando la Superintendencia tome a su cargo una institución, los jueces ante los cuales se ventilen juicios en que sea parte de dicha institución, darán inmediatamente noticia de ellos a la Superintendencia.

La declaración de liquidación por quiebra u otra causa que haga la Superintendencia será publicada en dos diarios, debiendo ser uno de ellos el designado para los avisos judiciales.

Artículo 90o.- Resuelta o declarada por la Superintendencia la liquidación de una institución, queda autorizada, cuando a su juicio el activo de la institución lo permita, a devolver de inmediato el importe de los depósitos del público con preferencia a los demás créditos de la institución en liquidación, estando igualmente facultada la Superintendencia en tales circunstancias para afectar, si fuese necesario, y hasta por la cantidad que a su

juicio sea suficiente, el activo de la institución en liquidación en garantía de las operaciones de crédito que pudieran realizarse con dicho fin. Estas operaciones de crédito podrán pactarse con instituciones financieras o bancarias a plazo mayor de un año.

Artículo 91o.- Para cooperar en la liquidación de cada institución se nombrará una Comisión compuesta de tres personas que asesorarán a la Superintendencia. Los miembros de esa Comisión serán nombrados, uno de ellos por el Ministro de Economía y Finanzas, otro por las instituciones de similar naturaleza jurídica que la sometida a liquidación y el tercero por los acreedores de la institución.

Los acreedores de cada institución en liquidación nombrarán su representante en esa Comisión en la forma que lo consideren conveniente. Si este representante no ha sido nombrado dentro de treinta días desde la fecha en que la Superintendencia resolvió o declaró en liquidación a la Institución, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú designará un acreedor para servir como miembro de la Comisión. Cualquier vacante que pudiere ocurrir se llenará por la entidad que hizo el primer nombramiento.

La Comisión no tendrá facultades administrativas y su opinión no tendrá carácter obligatorio para la Superintendencia, excepto en los casos específicamente establecidos en la presente norma. La Comisión, llevará un libro de actas en el que se sentará los acuerdos tomados en sus reuniones, y cada acta deberá ser firmada por los miembros asistentes. Los votos discordantes se expresarán por separado y constarán en el libro de actas.

Artículo 92o.- El Superintendente puede nombrar por medio de resolución, a uno o más Delegados Especiales que con carácter de representantes suyos y con los poderes que les confiera colaboren con él en la liquidación de los negocios y bienes de cualquier institución que tuviese a su cargo.

El Superintendente puede nombrar expertos, abogados o servidores que considere necesarios para la liquidación. Asimismo, el Superintendente puede contratar empleados para el proceso liquidatorio sin que por tal razón sean considerados servidores de la Superintendencia ni gocen de estabilidad laboral. Asimismo, podrá retener en servicio a los dependientes de la institución que considere necesarios para la liquidación.

Artículo 93o.- La Superintendencia pagará de los fondos de la institución a su cargo todos los gastos de su liquidación, y rendirá mensualmente cuenta de dichos gastos a la Comisión Asesora. El Superintendente fijará también y pagará de los mismos fondos las remuneraciones de los delegados especiales, abogados, ayudantes, expertos y otros empleados; dichas remuneraciones serán fijadas por el Superintendente con conocimiento de la Comisión Asesora.

Artículo 94o.- Los miembros de las Comisiones Asesoras, recibirán una remuneración por sesión cuyo monto fijará el Superintendente.

Artículo 95o.- Cuando la Superintendencia haya tomado a su cargo una institución, en administración o liquidación, avisará a todos los Bancos, Compañías o personas que posean bienes de esa institución y también al

Registro Mercantil para las anotaciones a que haya lugar.

Ningún Banco, Compañía o persona que sea notificada o que tenga conocimiento de que la Superintendencia haya tomado a su cargo en administración o liquidación una institución, podrá hacer pagos, adelantos, compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de dicha institución o con los fondos o bienes pertenecientes a ella, que tuviese en su poder.

Artículo 96o.- Tan pronto como la Superintendencia haya tomado a su cargo en administración o liquidación una institución, procederá a hacer un inventario, por triplicado, del activo de esa institución que determinará los bienes que quedan bajo la responsabilidad de la Superintendencia. La Superintendencia conservará una copia del inventario, cuidará de que otra copia sea archivada en la oficina de la institución en administración o liquidación y otra protocolizada en el registro de un Notario de la ciudad en donde la institución tiene su oficina principal.

Estos inventarios así como todas las otras listas o inventarios a que se hace referencia en este capítulo de la Ley, pueden consultarse libremente, por las personas interesadas, en la Oficina de la Superintendencia.

Artículo 97o.- El Superintendente después de haber tomado a su cargo una institución dispondrá que se publique un aviso para que las personas naturales o jurídicas que resulten ser propietarios de cualquier bien dejado en poder de la institución o arrendatarios de cajas de seguridad, bóveda o cofre, indicando a dichas empresas que recojan sus bienes dentro de un período no mayor de sesenta días a partir de la fecha del aviso.

Si los valores no fueron recogidos dentro del plazo fijado en el aviso, la Superintendencia entregará los valores al Banco Central de Reserva del Perú, para que los guarde en custodia a nombre del propietario.

Artículo 98o.- Transcurridos los sesenta días arriba mencionados, el Superintendente puede hacer abrir en su presencia o disponer que se abra en presencia de un Delegado Especial y de un Notario, cualquier caja de seguridad, bóveda o cofre en poder de la institución o que se halle dentro de un recinto y su contenido, si lo hay, se hará sellar y marcar claramente por dicho Notario con el nombre y dirección de la persona en cuyo nombre se haya registrado en los libros de la institución esa caja de seguridad, bóveda o cofre. Se adjuntará una lista y descripción del contenido, el paquete sellado, incluyendo dicha lista y descripción, se entregará al Banco Central de Reserva del Perú, en su Oficina más cercana para que lo conserve en custodia a nombre de su propietario.

Si alguno de los objetos o valores a que se refiere este artículo no fueran reclamados dentro de los cinco años a partir de la fecha en que fueron depositadas en el Banco Central de Reserva del Perú, serán vendidos en remate público, en la forma que la Superintendencia determine, y el producto líquido de la venta pertenecerá y se entregará al Tesoro Público.

Artículo 99o.- La Superintendencia se halla autorizada una vez tomada a su cargo una institución para liquidar sus negocios y para realizar todos los actos y efectuar todos los gastos que sean necesarios a fin de con-

servar los bienes que resulten necesarios. La Superintendencia podrá vender ó disponer de cualquier otra manera de todos los bienes muebles e inmuebles, créditos, derechos o acciones de la institución por su valor en libros o por cantidad superior a dicho valor.

La Superintendencia podrá, con la aprobación de la mayoría de los Miembros de la Comisión Asesora vender por menos de su valor en libros cualquier bien mueble o inmueble, derecho o acción de la institución, previa tasación y en remate público.

La Superintendencia podrá transigir o acordar programas de pago con los deudores de la institución en la forma que juzgue conveniente.

Artículo 100o.- Cuando un acreedor sea, a la vez, deudor de la Institución la compensación la efectuará la Superintendencia.

Cuando la Superintendencia determine que el activo de una institución en liquidación es suficiente para cubrir sus obligaciones en favor del público, se halla autorizada para hacer compensaciones que considere convenientes para la rápida liquidación de la institución.

Artículo 101o.- La Superintendencia avisará a todas las personas que puedan tener crédito contra la institución en liquidación para que los presenten y comprueben dentro de cuatro meses de la fecha del aviso y en el lugar especificado en él.

En el aviso se indicará la última fecha hábil para la presentación de dichas pruebas. La Superintendencia ordenará también que el aviso sea publicado quincenalmente durante dos meses seguidos en el periódico encargado de la publicación de los avisos judiciales, y en un diario de la ciudad donde se halle la Oficina Principal de la Institución.

Artículo 102o.- Después que haya transcurrido el período fijado para la presentación de pruebas de los Créditos contra una institución en liquidación, si la Superintendencia encuentra en los libros o comprobantes de dicha institución pruebas de la existencia de créditos que no han sido reclamados, hará una lista de tales créditos por el importe que considere que representa obligación de la institución en liquidación. Esta lista se hará por triplicado y se archivará y protocolizará en la misma forma y al mismo tiempo que la lista de créditos presentados.

Artículo 103o.- Cesan de devengar intereses todas las deudas de la institución en liquidación, a partir de la fecha en que la Superintendencia decida o declare la liquidación, exceptuándose las deudas con hipoteca o prenda hasta donde alcance el producto de la respectiva garantía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103o. de la presente norma.

Artículo 104o.- La Superintendencia hará por triplicado una lista completa de todos los créditos presentados y los que determine, especificará en ella el nombre de cada acreedor, la naturaleza del crédito, la cantidad reclamada, archivará una copia de dicha lista en su oficina, otra en la oficina principal de la liquidación, y otra será protocolizada en el Registro de un Notario de la ciudad donde la institución tenga su Oficina Principal.

Artículo 105o.- La Superintendencia anunciará por medio de avisos publicados una vez por semana duran-

te un mes en el periódico encargado de la publicación de los avisos judiciales y en un diario de la ciudad donde se halle la Oficina Principal de la institución, que ha cumplido con archivar y protocolizar las listas de créditos a que se refieren los artículos 102o. y 104o.

Los que sean acreedores de la institución únicamente por créditos que figuren en la lista no pueden formular objeción de ninguna especie y los créditos que figuren en esa misma lista no pueden ser materia de pedidos de preferencia que no haya sido considerada por la Superintendencia al formular dicha lista. Con la limitación indicada, cualquier parte interesada puede formular objeciones a los créditos en la lista dentro de los 30 días posteriores a la publicación del último aviso, presentando a la Superintendencia dichas objeciones por escrito firmado por el objetante.

La Superintendencia dentro de los 60 días posteriores a la presentación del escrito del objetante, pronunciará su decisión respecto de las objeciones formuladas.

Artículo 106o.- Expirado el término para presentar objeciones conforme a lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la lista formulada, la Superintendencia expedirá resolución aprobando o rechazando los créditos consignados en dichas listas, no siendo necesario referirse específicamente a cada uno de ellos sino en el caso de que haya sido materia de objeción o pedido de preferencia notificándose la resolución correspondiente al objetante o solicitante y al titular del crédito. Al tiempo de resolver sobre los créditos la Superintendencia establecerá la preferencia de ellos conforme a ley. Sobre las resoluciones del Superintendente caben las reclamaciones y recursos administrativos de ley.

Artículo 107o.- Pagados los créditos preferenciales y cubiertos los gastos la Superintendencia podrá con cargo a los recursos que quedan disponibles, otorgar pagos a cuenta a los acreedores comunes, los que serán efectuados en proporción a los montos de sus créditos aprobados.

Artículo 108o.- Cualquier recurso en efectivo o valores del activo pertinente a los acreedores de una institución en liquidación que resultara, terminada la liquidación en poder de la Superintendencia, serán depositados en el Banco Central de Reserva del Perú en beneficio de dichos acreedores.

Las entregas a favor de cualesquiera de los acreedores que no hubieran reclamado dentro de dos años de la fecha de declaración, las entregas a cuenta pueden también ser depositados en beneficio de los acreedores comunes en el Banco Central de Reserva del Perú.

Cualquier recurso económico o bienes del activo pertenecientes a los acreedores y depositados en el Banco Central de Reserva del Perú que no hubiesen sido reclamados pasarán a ser propiedad del Tesoro Público, luego de transcurrido el período de prescripción que señala la ley.

Artículo 109o.- Si después de pagar los gastos de la liquidación y todos los créditos aprobados contra la institución en liquidación quedara recurso económico o valores del activo en poder de la Superintendencia deberá pagarse intereses sobre todos los créditos, desde la fecha en que tomó a su cargo la institución hasta la fe-

cha del pago de tales créditos a la tasa que determina el Banco Central de Reserva del Perú, o al tipo más aproximado a ésta que le permita dicho activo.

Artículo 110o.- Después de cancelados los créditos, efectuadas las provisiones para los créditos en litigio, pagados todos los gastos de liquidación y los intereses a que se refiere el artículo anterior, la Superintendencia depositará en el Banco Central de Reserva del Perú el importe de los créditos declarados que no hayan sido cobrados por los acreedores. El Banco Central de Reserva del Perú conservará dicha cantidad para hacer los pagos correspondientes con anuencia de la Superintendencia, por el plazo de cinco años, a la expiración de los cuales los saldos no reclamados pertenecerán al Tesoro Público. Para los créditos con litigio pendiente, el plazo de cinco años rige a partir de la fecha de la sentencia que cause ejecutoria.

Artículo 111o.- Dentro de los treinta días siguientes a la expedición de una resolución de la Superintendencia sobre aceptación o rechazo de algún crédito o sobre preferencia en el pago, el interesado podrá apelar de dicha resolución ante la Corte Superior, siempre que la suma controvertida ascienda a un monto no menor de 25 Unidades Impositivas Tributarias.

La Superintendencia admitirá la apelación y remitirá a la Corte Superior copia certificada del expediente respectivo.

El apelante expresará agravios en el escrito de apelación. El Superintendente podrá contestar en el plazo de seis días, transcurridos los cuales se pedirá autos para la sentencia y se pondrá la causa en tabla. No se admitirá nuevas excepciones ni se abrirá nuevo término de prueba. Las partes podrán presentar prueba instrumental. De la sentencia que se expida podrá interponerse recurso de nulidad.

Si la decisión objetada representa una suma menor al equivalente de 25 Unidades Impositivas Tributarias, el interesado podrá interponer recurso de reconsideración con arreglo a ley.

Artículo 112o.- No podrá constituirse ningún gravamen, ni decretarse embargos, ni seguirse procedimientos de ejecución de sentencias sobre ningún bien de una institución en liquidación por razón de ningún fallo judicial expedido contra dicha institución, después que la Superintendencia haya hecho cargo de sus bienes y propiedades y mientras tal situación continúe en vigor.

Artículo 113o.- La Superintendencia deberá publicar por lo menos una vez al año balances que informen sobre el estado de cada institución en liquidación.

Artículo 114o.- Cuando la Superintendencia haya realizado totalmente los créditos de una institución en liquidación y cumplido con lo dispuesto en el artículo 110o. deberá convocar a Junta de accionistas o Asamblea de propietarios de dicha institución.

En dicha Junta o Asamblea nombrará uno o más representantes propios para continuar la liquidación bajo la supervigilancia de la Superintendencia.

TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese al Banco Central de Reserva del Perú y a la Superintendencia, para que, coordinadamente, formulen un sistema de Protección de Depósitos, cuya finalidad será la de garantizar la cobertura del riesgo de insolvencia de las instituciones bancarias y financieras por depósitos recibidos.

SEGUNDA.- En los casos en que la Superintendencia y el Banco Central de Reserva deban aplicar límites o restricciones a las instituciones a que se refiere la presente norma, la política a aplicarse deberá contar con aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas el que se pronunciará en el plazo de quince días calendario, caso contrario se dará por emitida la opinión favorable.

TERCERA.- Los exámenes que practique la Contraloría General de la República en las instituciones controladas o supervisadas por la Superintendencia de propiedad directa o indirecta del Estado, están referidos exclusivamente al manejo presupuestal administrativo de aquellas entidades.

CUARTA.- Créase el Instituto Superior de Asuntos Bancarios y de Seguros como persona jurídica de derecho público, con autonomía académica, administrativa y económica, dependiente funcionalmente de la Superintendencia, con la finalidad de formar profesionales y técnicos expertos en dichas materias. Su funcionamiento será financiado con los recursos del Fondo creado por el artículo 22o. de la Ley No. 24723.

Su reglamento será elaborado en un plazo de 90 días por una Comisión integrada por dos representantes de la Superintendencia, uno de los cuales la presidirá; un representante del Banco Central de Reserva del Perú; un representante del Ministerio de Educación y un representante de las empresas supervisadas por la Superintendencia; y será aprobado mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Educación.

QUINTA.- El Banco de la Nación participa a nombre del Estado en empresas o instituciones bancarias o financieras del exterior, con la finalidad de ampliar la capacidad de captación de ahorro externo en beneficio de la economía del país y de facilitar las operaciones con el exterior.

Facúltase a su Directorio para realizar las acciones que resulten necesarias, y asimismo proponer al Ministerio de Economía y Finanzas las normas legales que se requieren.

SEXTA.- La Superintendencia en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú, establecerá anualmente las normas que permitan a las instituciones financieras, en el plazo máximo de diez años, cumplir con otorgar financiamiento a las actividades productoras de bienes y servicios en forma proporcional al Producto Bruto generado en cada región en que opera y preferentemente a las prioritarias.

SETIMA.- Deróguense los Decretos Leyes Nos. 7159, 14480, 18957, sus disposiciones ampliatorias y modifi-

caciones y demás dispositivos legales en todo lo que se opongán a lo dispuesto en la presente norma.

TITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia expedirán en un plazo de 180 días las normas reglamentarias y complementarias que les compete de acuerdo a la presente norma.

En tanto dichas instituciones no expidan tales normas se mantienen vigentes aquéllas en cuanto a monto o plazo vienen rigiendo las operaciones normadas por este dispositivo.

SEGUNDA.- Las instituciones de intermediación financiera que se encuentran en funcionamiento al promulgarse la presente norma adecuarán sus Estatutos a las presentes disposiciones en un plazo que no excederá de 180 días.

TERCERA.- La Superintendencia señalará los requisitos que debe cumplir la creación del Banco de los Trabajadores, Bancos Cooperativos y el Banco de la Provincia Constitucional del Callao.

La aprobación de dichos requisitos se harán mediante decretos supremos refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas.

CUARTA.- Las instituciones financieras no podrán conceder créditos a una sola persona natural o jurídica en proporción superior al 9% de su patrimonio.

La Superintendencia, en concordancia con el Banco Central de Reserva del Perú, podrá variar dicho límite individual, de acuerdo a lo dispuesto en el título IV de esta norma.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso.

Lima, 07 de Abril de 1988.

ALAN GARCIA PEREZ

GUSTAVO SABERBEIN CHEVALIER,

Ministro de Economía y Finanzas.